



Al servicio de la Justicia y de la paz social

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADO SUSTANCIADOR
MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Medellín D.E. de C., T., e I., trece de febrero de dos mil veintitrés.

PROCESO	Verbal (Responsabilidad Civil Extracontractual).
DEMANDANTE	Martha Vargas Osorio y otros.
DEMANDADO	Banco Pichincha S.A. y otros.
PROCEDENCIA	Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medellín
CUDR	05001-31-03-009–2019-00490-01
RADICADO INTERNO	048-22
PROVIDENCIA	035-23
DECISIÓN	De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del C. General del Proceso, <i>“Los términos señalados en este código para la realización de los actos procesales de las partes y los auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables, salvo disposición en contrario”.</i> CONFIRMA.

ASUNTO A RESOLVER

Procede el Despacho a resolver la apelación formulada por la demandada BANCO PICHINCHA S.A. en contra del auto del 23 de julio de 2021, mediante el cual se rechazó la contestación de la demanda debido a su extemporaneidad.

ANTECEDENTES

1.- Hechos y pretensiones. Martha Vargas Osorio, Nelly Vargas Osorio, Juan Camilo Henao Vargas y María Orfaneri Osorio Arias, presentaron demanda verbal del responsabilidad civil contractual y extracontractual en contra de Cristian Alexander Molina Usma, Banco Pichincha, Conducciones Palenque Robledal S.A. y SBS SEGUROS DE COLOMBIA S.A., mediante la cual pretenden la indemnización de perjuicios en razón de la lesiones sufridas por la señora Martha Vargas Osorio, en el accidente de tránsito ocurrido el 20 de enero de 2018.

2.- Trámite. Una vez admitida la demanda por auto del 16 de enero de 2020, los encausados fueron notificados así: El 19 de febrero de 2020 se notificó

personalmente Conducciones Palenque Robledal S.A., el 20 de febrero de 2020 se notificó personalmente SBS SEGUROS DE COLOMBIA S.A., y el BANCO PICHINCHA S.A. se notificó también en forma personal el 12 de marzo de 2020.

3.- El auto apelado. Luego, por providencia del 23 de julio de 2021, el *a quo* rechazó la contestación y el llamamiento en garantía presentado por el demandado BANCO PICHINCHA S.A., por cuanto habían sido presentados de manera extemporánea.

4.- La apelación. Oportunamente la vocera judicial del BANCO PICHINCHA S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, argumentando que la notificación realizada a su poderdante, únicamente da cuenta de que asistió al despacho, pero no existe constancia de que hubiese conocido el cuerpo de la demanda y sus anexos, y mucho menos que hubiese recibido el traslado.

Relató que la notificación personal del Banco de llevó a cabo el 12 de marzo de 2020, el 16 de marzo de 2020 se cerraron los juzgado por la pandemia del COVID 19, hasta el 30 de junio de 2021, el seis de julio de 2020, solicitó permiso para el ingreso a las instalaciones del juzgado, el de julio de 2020 la requirieron para que allegara el poder, el cual fue aportado en la misma fecha; el 11 de julio de 2020 recibió el *link* del expediente, pero no correspondía al proceso solicitado, por tanto, el 21 de septiembre de 2020 petitionó nuevamente el envío del expediente digital, el cual recibió en la misma fecha en forma correcta.

En su sentir, la notificación real se surtió el 21 de septiembre de 2020, cuando conoció el expediente, por tanto, la contestación y el llamamiento en garantía que radicó ante el juzgado de conocimiento el 15 de octubre de 2021, lo fueron de manera oportuna.

Aduce que, si el juzgado hubiese remitido en tiempo el expediente, una vez se le solicitó el ingreso o la copia digital, habrían podido, dentro del término inicialmente otorgado, contestar la demanda; sin embargo, por razones que desconoce, sólo meses después pudo acceder a la demanda impetrada en contra del Banco Pichincha S.A.

La *a quo* no repuso su decisión y concedió la apelación interpuesta en forma subsidiaria mediante proveído del 10 de mayo de 2022.

CONSIDERACIONES

1.- Notificaciones. Con el fin de que las partes involucradas en un proceso se enteren de las decisiones adoptadas dentro del mismo, el legislador consagró varias formas para darlas a conocer, atendiendo a circunstancias específicas de la providencia o del proceso. La principal y más importante es la notificación personal, que busca primordialmente garantizar que las partes o, en ocasiones, terceros se enteren del adelantamiento de determinado trámite procesal, con el fin de que ejerzan su derecho de contradicción; de esta manera, la notificación personal aparece como el procedimiento por excelencia para conocer de una actuación, debido a que es el instrumento primordial para la materialización del principio de publicidad como lo sostiene la Corte Constitucional en sentencia C-783 de 2004, y a través de la cual se logra una mayor garantía del derecho de defensa.

Es así como el artículo 291 del Estatuto General de Proceso, establece que deberá notificarse de manera personal, al demandado o a su representante o apoderado judicial, el auto que libra mandamiento de pago, y la primera providencia que se dicte en todo proceso.

Sobre la finalidad de la notificación, señaló la Corte Constitucional en sentencia T-309 de 2001, MP. Alfredo Beltrán Sierra:

“...Las notificaciones como se sabe, constituyen un acto material de comunicación, por medio de las cuales se pone en conocimiento de las partes o de terceros interesados, las decisiones que se profieren dentro de un proceso o trámite, ya sea judicial o administrativo, de tal suerte, que se puedan garantizar los principios de publicidad y contradicción y, “sobre todo, cumplen la función de prevenir que se pueda afectar a alguna persona con una decisión sin haber sido oída, con violación del principio constitucional al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta”...”

2.-Términos legales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del C. General del Proceso, *“Los términos señalados en este código para la realización de los actos procesales de las partes y los auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables, salvo disposición en contrario”.*

Se trata de los plazos que señalan numéricamente las normas de nuestro estado procesal, de manera que dentro de los mismos se realicen las diferentes actuaciones procesales, tanto por las partes como por los funcionarios.

En sentencia C-012 de 2002, MP. Jaime Araujo Rentería, la corte Constitucional advirtió lo siguiente sobre los términos procesales:

Los términos procesales “constituyen en general el momento o la oportunidad que la ley, o el juez, a falta de señalamiento legal, establecen para la ejecución de las etapas o actividades que deben cumplirse dentro del proceso por aquél, las partes, los terceros intervinientes y los auxiliares de la justicia”. Por regla general, los términos son perentorios, esto es, improrrogables y su transcurso extingue la facultad jurídica que se gozaba mientras estaban aún vigentes.

Tanto las partes procesales como las autoridades judiciales están obligadas a cumplir en forma exacta y diligente los plazos que la ley consagra para la ejecución de las distintas actuaciones y diligencias en las diversas fases del proceso. Así pues, las partes tienen la carga de presentar la demanda, pedir pruebas, controvertir las allegadas al proceso, interponer y sustentar los recursos y, en fin, participar de cualquier otra forma en el proceso dentro de las etapas y términos establecidos en la ley, así como el juez y auxiliares de justicia tienen el deber correlativo de velar por el acatamiento de los términos procesales.

3.- Caso concreto. En el asunto objeto de estudio, el problema jurídico a resolver será entonces, si la contestación a la demanda y el llamamiento en garantía realizado por el codemandado BANCO PICHINCHA S.A. fueron presentados a tiempo, como lo indica dicha encausado o sí, como lo señala el Juzgado, fueron allegados de manera extemporánea, esto es, por fuera de los 20 días que otorga para tal efecto el artículo 369 del C. General del Proceso.

Ciertamente, y frente a ello no existe discusión, el Banco Pichincha recibió notificación personal del auto admisorio de la demanda de la referencia, por intermedio de apoderada, el 12 de marzo de 2020. (fl. 236 del archivo digital 01).

Por tanto, resulta contrario a la realidad lo afirmado por la apelante, en cuanto que la notificación real se surtió el 21 de septiembre de 2020, cuando conoció el expediente, ya que del proceso necesariamente tuvo que tener conocimiento el día que se acercó personalmente a notificarse del mismo.

Esta afirmación no puede ser de recibo, toda vez que la apoderada que se hizo presente en el juzgado, tuvo la oportunidad de acceder al expediente físico y obtener la documentación que requiriera; y aunque se pretenda advertir que no le fue entregado copia de la demanda y sus anexos, bien pudo, se repite, solicitarlos de manera inmediata a la oficial mayor que realizó la notificación, o dentro de los tres días posteriores, cuando aún no había iniciado la suspensión de términos judiciales, en los términos del precepto 91 del Código General del Proceso.

Ahora, como se advirtió en primera instancia, los términos judiciales estuvieron suspendidos desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020, en razón a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional por la pandemia COVID 19, conforme a los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior del Poder Judicial, con números PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549, PCSJA20-11556 y PCSJA20-11567. Luego existieron unas nuevas suspensiones de términos de manera esporádica, hasta el tres de julio de 2020, entre el 13 y el 26 de julio de 2020, entre el 31 de julio y dos de agosto de 2020, y, por último, del 7 al 09 de agosto de 2020, todas con ocasión a la aludida pandemia.

Revisados los pronunciamientos de la demandada BANCO PICHINCHA S.A., se tiene que estos se presentaron el 15 de octubre de 2020, lo que evidencia a todas luces que fueron extemporáneos. Obsérvese que, incluso contando a partir del 10 de agosto de 2020, los veinte días de traslado que tenía la citada codemandada para contestar el libelo, de todas maneras, el interregno se supera con creces.

De otro lado, se duele la recurrente que si el juzgado hubiese remitido en tiempo el expediente una vez se lo solicitó, habría podido contestar la demanda dentro del término inicialmente otorgado. Frente a este argumento, hay reiterar por parte de la Sala que, desde el mismo momento en que recibió notificación personal

del auto admisorio de la demanda, tuvo acceso al expediente físico, y necesariamente la recepción del traslado correspondiente.

No obstante, si en gracia de discusión se concluyera que no le fueron entregados la copia de la demanda y los anexos al momento de la notificación personal, lo cual carece de acreditación probatoria, para el 15 de julio 2020 que solicitó el expediente digital vía email, aún contaba con oportunidad para contestar el libelo, sin embargo, solo hasta el 21 de septiembre de 2020, volvió a realizar el requerimiento respectivo.

En esa medida, dicha convocada fue pasiva en el actuar procesal, pues a pesar de contar con que su notificación personal de la demanda se había realizado desde el 12 de marzo de 2020, y, por tanto, lo términos procesales, que son perentorios e improrrogables, estaban avanzando, dejó pasar más de dos meses sin actividad alguna.

Con todo, es procedente concluir, como lo hizo la *a quo*, que el codemandado BANCO PICHINCHA, a pesar de haber tenido la carga de contestar la demanda dentro del término establecido en la ley, no la cumplió, y bajo ese entendido, había lugar al rechazo de su la respuesta presentada por extemporánea.

En consecuencia, se confirmará la decisión apelada y se condenará en costas al recurrente.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, LA SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, **CONFIRMA** el auto proferido por el JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, el 23 de julio de 2021, dentro del proceso VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL instaurado por MARTHA VARGAS OSORIO Y OTROS en contra del BANCO PICHINCHA S.A. Y OTROS.

Se condena en costas a la parte demandada BANCO PINCHINCHA S.A., las

cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Juzgado de primera instancia. Como agencias en derecho se fija la suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, esto es, UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL PESOS M.L. (\$1.160.000).

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MARIO GÓMEZ LONDOÑO', with a stylized flourish at the end.

MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO
Magistrado